

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°103

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **JESÚS SAUL PINEDA HOYOS** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se declare la ineficacia de su vinculación al RAIS; y, en consecuencia, se declare que se mantuvo afiliado sin solución de continuidad al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

Como consecuencia de lo anterior condene a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los aportes recibidos con motivo de la afiliación del actor con sus rendimientos financieros.

Finalmente, se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **5 de junio de 1959** y laboró al servicio de varios empleadores un total de 1541 semanas hasta la fecha de su retiro del sistema de pensiones.

El actor fue afiliado al **ISS** hoy **Colpensiones** en el mes de febrero de 1980 y se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.**, sin que antes de su vinculación se le suministrara una información clara y detallada acerca de las diferencias existentes entre los regímenes pensionales y sus ventajas y desventajas comparativas.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderada indicó que es cierta la fecha de nacimiento del actor, frente a los demás hechos adujo que no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia de decretar la ineficacia, improcedencia de intereses moratorios, legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, inexistencia de vicios del consentimiento, devolución de cuotas y gastos de administración, improcedencia de la condena en costas y compensación.

Respuesta Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada manifestó que el demandante es su afiliado y que antes de su vinculación le brindó una asesoría clara, completa, comprensible, veraz y profesional en la que se estudiaron las particularidades de su caso, realizando las respectivas proyecciones pensionales en ambos regímenes de manera verbal, con el fin de determinar el panorama pensional y orientar debidamente su decisión.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de las restituciones mutuas e inexistencia de obligación de devolver prima del seguro previsional.

Sentencia de primera instancia

El Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **11 de abril de 2023**, declaró la ineficacia del traslado al RAIS, **condenando a Protección S.A.**, a trasladar a **Colpensiones**, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual junto con sus rendimientos. De igual modo, deberá devolver el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, los cuales se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros y reaseguros fogafin, pagos correspondientes a la AFP por su gestión, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.2.2.4.8. del decreto 1833 de 2016, durante todo el tiempo que permaneció afiliado a dicha entidad.

De otro lado, le ordenó a **Colpensiones**, activar la afiliación del demandante al RPM que administra y recibir todos los dineros que le sean trasladados por **Protección S.A.**, realizando la respectiva actualización de la historia laboral.

Esta decisión no la compartieron los apoderados del demandante y **Protección S.A.**, motivo por el cual la impugnó en los siguientes términos:

Recurso Demandante

El recurrente solicita al Tribunal que se pronuncie acerca de la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez en favor del actor, pues si bien este tiene la condición de empleado público, se debe tener en cuenta que de conformidad con Auto 406-2021, decisión en la que la Corte Constitucional concluyó que el competente para conocer de la solicitud pensional de servidores públicos que reclamen la ineficacia de la afiliación y en consecuencia la pensión de vejez.

Recurso Protección S.A.

Por su parte, la apoderada de **Protección S.A.** solicitó que no se imponga la devolución del concepto de reaseguros por cuanto el mismo no aplica para el caso estudiado, como quiera que no pagó en vigencia de la afiliación del demandante dinero alguno por este concepto.

En lo referente con la devolución de lo pagado al Fogafin, hizo una explicación de su naturaleza jurídica y sus finalidades, destacando que la obligación de las administradoras de realizar pagos por esta garantía desapareció con la Ley

1450 del 2011 y que en todo caso este concepto nunca se descontó al afiliado del porcentaje de su aporte.

Finalmente, expresa que no se debió ordenar la devolución de los dineros contenidos en el fondo de garantía de la pensión mínima por cuanto esta tiene como finalidad apoyar el componente solidario en el RAIS, y en esa medida se torna irrelevante su traslado al RPM.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia por cuanto el demandante pretende desconocer la prohibición de tránsito entre regímenes para las personas que les faltan menos de 10 años para cumplir la edad pensional, sin que por lo demás demuestre la existencia de algún vicio que invalide su consentimiento al momento de suscribir su vinculación con el RAIS.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante resulta o no eficaz, (ii) establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) Determinar si el Juez Ordinario Laboral cuenta con competencia para resolver la solicitud pensional del actor teniendo en cuenta que se trata de un empleado pública y (iv) revisar si operó la prescripción.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El señor **Jesús Saúl Pineda Hoyos** nació el 5 de junio de 1959 (01/pág.50).
2. El actor fue afiliado al **ISS** hoy **Colpensiones** el día **8 de febrero de 1980** realizando cotizaciones a esta administradora hasta el mes de junio de 2006, para un total de 794 semanas (01/pág.51).

3. El día **22 de mayo del 2006**, el señor **Pineda Hoyos** suscribió formulario de afiliación a **Protección S.A.** (01/pág.86), afiliación vigente desde el **1 de julio de 2006** (11/pág.43).
4. Conforme con historia laboral expedida por **Protección S.A.**, el demandante cotizó a esa administradora un total de 761,86 semanas hasta el 202105, siendo su último empleador el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (01/págs.66-85).

Efectuada la anterior anotación procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-755-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de **Protección S.A.** se realizó el **22 de mayo del 2006** (01/pág.86), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia interpretando artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los

regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** cuando dio respuesta a la demanda sostiene que entregó al afiliado una asesoría clara, completa, comprensible, veraz y profesional, sin embargo, más allá de esta afirmación no se trajo al proceso prueba de que se entregó al actor una descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales y que la misma fue suministrada en un lenguaje claro, simple y comprensible para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación¹,

¹En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081-2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

debiendo recordarse que la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios² pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

De otro lado, es necesario recordar que situaciones como la reasesoría no están llamadas a sanear la ausencia de información inicial, conforme lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-1729-2022, en la que al respecto se indicó:

Tampoco podría argüirse que la reasesoría a la afiliada sea una razón de peso para sanear la ausencia de información, tal y como ha sido precisado por esta Corporación en sentencia CSJ SL1688-2019, reiterada en sentencia CSJ SL4705-2021, por dos razones: «[...] la primera, porque el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad implica la pérdida de los beneficios derivados del régimen de transición y, la segunda, porque la oportunidad de información se juzga al momento del acto jurídico del traslado no con posterioridad -un dato sólo es relevante y útil si es oportuno»

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar bajo los parámetros vigentes para el momento de la afiliación, la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que se **confirmará** el fallo consultado.

De los efectos de la ineficacia

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

El Juez de primera instancia, condenó a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual junto con sus rendimientos. De igual modo, deberá devolver el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, los cuales se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros y reaseguros Fogafín, pagos correspondientes a la AFP por su gestión, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos.

Esta condena es recurrida de forma parcial por la apoderada de **Protección S.A.** argumentando que no es procedente la devolución de dos de los conceptos enlistados en la decisión de primera instancia: (i) la prima de reaseguros del Fogafín por que no existe prueba de que fuera cobrada y además se trata de un concepto derogado por la Ley 1450 de 2011 para los fondos de pensiones y (ii) los dineros contenidos en el fondo de garantía de la pensión mínima por cuanto los mismo se destinan a financiar el componente de solidaridad en el RAIS.

Con el fin de dar respuesta al recurso y de paso resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor a **Colpensiones**, es relevante recordar que en este caso se está aplicando la ineficacia, como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una **ineficacia en sentido estricto**, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculada al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los

gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, porque precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Siguiendo esta premisa es que cobra importancia la orden dada por el juez de primera instancia, por cuanto la misma identifica cada uno de los conceptos relacionados por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y procura por que la devolución sea plena sin que se pueda conservar de parte del fondo que generó la ineficacia una suma por cualquier concepto, de forma que si realizó algún cobro o pago por el mismo, tal circunstancia no pueda servir de excusa o fundamento, para que al momento de trasladar los dineros que debió recibir el RPM lo haga de forma parcial.

Finalmente, en lo que toca con los aportes al fondo de garantía de la pensión mínima, basta indicar que el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016³, posición que por demás sigue el precedente vertical de la Corte Suprema de Justicia que se ha dejado consignado en sentencias como la SL-610-2023.

Así las cosas, queda resuelto el recurso presentado por la apoderada recurrente, indicando que se desestima su solicitud, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido, esta Sala a partir del precedente jurisprudencial ha identificado los siguientes:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM⁴.

³En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁵.
3. Los **gastos de administración**⁶, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁷, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁸.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** concepto cuyas razones para su devolución fue ampliamente explicado al resolver el recurso.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia en lo referente a las condenas que fueron impuestas a la AFP privada por lo que se **confirmará** la decisión de primera instancia.

Del reconocimiento de la pensión de vejez

Frente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, punto en el que el apoderado del demandante plantea su desacuerdo por considerar que a pesar de la condición de empleado público de su representado debe el juez laboral

⁵Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁶ Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁷ Sentencia SL-4360-2019.

⁸ Sentencia SL-2877-2020.

resolver su solicitud pensional al amparo de lo establecido por el Auto 406-2021, debe indicar la Sala que tal providencia fija como regla que el conocimiento de los procesos en que reclama la ineficacia de traslado son competencia de la jurisdicción ordinaria laboral por cuanto el sujeto pasivo de esta pretensión es una administradora privada de pensiones, regla que no se extiende al momento de resolver la reclamación del derecho pensional frente **Colpensiones**⁹ como quiera que en este caso la competencia en los términos del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA¹⁰, recae en los jueces de lo Contencioso Administrativo.

Sobre el particular es importante hacer mención de la regla decisión contenida en el Auto 919 de 2021, en el cual la Corte Constitucional al resolver conflicto de jurisdicciones indicó:

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas mediante las que se pretenda el reconocimiento pensional de una persona que fue empleada pública, solicitó el reconocimiento pensional en dicha calidad y está afiliada a un régimen administrado por una persona de derecho público.

Además se debe recordar, que por tratarse de falta de “*jurisdicción*” no es posible la prórroga de la competencia (sentencia T-064-2016) y en ese sentido resultó acertada la decisión del juez primera instancia al excluir del debate procesal esta pretensión por carecer de jurisdicción para resolver sobre la misma, quedando habilitado el demandante para reclamar ante el juez natural el reconocimiento de su derecho pensional en caso de que este no sea reconocido por la vía administrativa.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

⁹Entidad que de acuerdo con la Ley 1151 de 2007, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional.

¹⁰“4. Relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.”

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el día **11 de abril de 2023**, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **JESÚS SAUL PINEDA HOYOS** contra **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-002-2022-00170-01
Radicado Interno: P0742323
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Jesús Saúl Pineda Hoyos
Demandado (s)	Protección S.A. y Colpensiones.
Radicado	05001-31-05-002-2022-00170-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de mayo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO